

Procuración General de la Nación

S u p r e m a C o r t e :

-I-

A fs. 70/104, Juan Ernesto Simón, con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inicia acción declarativa de certeza, en los términos del art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, contra la Provincia de La Pampa (Poder Ejecutivo, Ministerio de Hacienda y Finanzas, Dirección General de Rentas), a fin de que V.E. despeje el estado de incertidumbre en el que manifiesta encontrarse frente al alcance de los títulos primero (arts. 2º y 4º, inc. 'a') y segundo (arts. 10, 11, 12, 13 y 14) de la ley local 2.936 y sus normas reglamentarias.

Puntualiza que, con sustento en tales normas, la demandada pretende gravar la totalidad del patrimonio exteriorizado al amparo del libro II, título I, art. 36 y ss. de la ley nacional 27.260, con un impuesto especial del cinco por ciento (5%) calculado sobre las tenencias y bienes declarados. Sostiene que esa exigencia tributaria colisiona con el impuesto análogo establecido por el artículo 41 de la citada ley federal.

Relata que:

- i) es contribuyente inscripto ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en el impuesto a las ganancias y en el impuesto al valor agregado y aclara que no es contribuyente del impuesto sobre los ingresos brutos en la Provincia de La Pampa;
- ii) adhirió voluntariamente al régimen de sinceramiento fiscal creado por el libro II, título I, de la ley nacional 27.260;
- iii) en el marco de dicho acogimiento, exteriorizó bienes y tenencias por la suma de \$60.089.231,90 y, como consecuencia de ello, abonó el impuesto especial previsto por el art. 41 de la mencionada ley nacional (por la suma de \$4.300.063,56);

iv) entre los bienes y tenencias informados al fisco nacional, reveló la titularidad del cincuenta por ciento (50%) de un inmueble, sito en calle 13 8 de la localidad de General Pico, Provincia de La Pampa, que había sido adquirido el 7 de julio de 2014 por Mauricio Campasso, según las siguientes proporciones: treinta y cinco por ciento (35%) para sí, quince por ciento (15%) con dinero de y para Mariana Marchini -cónyuge del primero- y el cincuenta por ciento (50%) restante con dinero de y para Hallak S.A.;

v) el 21 de diciembre de 2017, el actor -por sí y en su carácter de presidente del directorio de Hallak S.A.- facultó, mediante poder especial, a Mauricio Campasso para que: a) en primer lugar, en nombre y representación de la sociedad, aceptara la compra por la mitad indivisa del inmueble y luego transmitiera al aquí actor el dominio de dicha parte indivisa, a los fines de cumplir con lo previsto en el art. 38 *in fine* de la ley 27.260 (en cuanto allí se exige -como condición para gozar de los beneficios previstos en la ley- que, con anterioridad a la fecha del vencimiento para la presentación de la declaración jurada del impuesto a las ganancias del período fiscal 2017, los bienes declarados figuren a nombre del declarante); y b) en segundo lugar, en su nombre y representación, aceptara dicha transferencia de dominio y pudiera enajenar el inmueble a favor de terceros, de manera simultánea a la transferencia de dominio a realizar;

vi) el 27 de diciembre de 2017, Mauricio Campasso -por sí y en virtud de las facultades conferidas por Juan Ernesto Simón- junto con la restante cotitular suscribieron con terceros un boleto de compraventa del inmueble sito en la Provincia de La Pampa. Mediante tal instrumento, la parte vendedora entregó la

Procuración General de la Nación

posesión del inmueble y se obligó a escriturar la operación allí concertada dentro de los tres meses de firmado el boleto (conf. cláusula tercera). Asimismo, allí se previó que la operación de compraventa se realizaba bajo la condición de que el título de la vendedora fuera perfecto y que sobre ésta y sobre la cosa vendida no pesaran inhibiciones, embargos, gravámenes ni restricciones a su libre transferibilidad; en consecuencia, Mariana Marchini, por derecho propio, y Mauricio Campasso, en representación de Hallak S.A., se obligaban a suscribir la correspondiente aceptación de compra por el 15% correspondiente a la primera y el 50% correspondiente a Hallak S.A., que les correspondía respecto del inmueble vendido y, además, Mauricio Campasso, en representación de Hallak S.A. y Juan Ernesto Simón se obligaban a transmitir a este último el dominio del 50% indiviso del lote mencionado, conforme a lo establecido por el artículo 38 de la ley 27.260 de sinceramiento fiscal, todo ello en forma previa y simultánea con la escritura traslativa de dominio a favor de la parte compradora (cláusula quinta);

vii) las partes abonaron el impuesto de sellos por el boleto de compraventa suscripto; y

viii) al iniciarse el trámite para la celebración de la escritura, la escribana designada le exigió el pago del impuesto especial previsto por la ley local 2.936, a pagarse sobre todo el patrimonio exteriorizado al amparo de la ley 27.260.

En tal contexto, señala que invocó el carácter optativo del régimen local (conf. art. 2 de la ley provincial) y solicitó que se liquidara el impuesto de sellos y la tasa de inscripción correspondiente a la aceptación de compraventa celebrada (mediante el boleto mencionado en el punto vi de este acápite) ante la Dirección General de Rentas local. Esta última

rechazó su pedido y declaró la obligatoriedad del pago del tributo.

Frente a tales circunstancias, solicita que se declare la inaplicabilidad a su respecto —o la inconstitucionalidad— de los arts. 1°, 2°, 4° —inc. a)—, 6°, 7°, 10, 11, 12, 13 y 14 de la ley 2.936 y sus normas complementarias, de modo tal que no se encuentre alcanzado por el impuesto especial allí previsto.

Fundamenta su pedido en que —a su entender— el legislador local excedió las potestades tributarias establecidas en la Constitución Nacional para las provincias (arts. 31, 75 —inc. 2°—, 121 y 124) y en la ley 23.548 de coparticipación federal (art. 9°, inc. 'b'), al gravar un patrimonio compuesto de bienes y tenencias en el país y en el exterior (ya gravados por el impuesto especial establecido por el art. 41 de la ley 27.260), considerándolo base imponible del impuesto sobre los ingresos brutos sin sustento territorial en la provincia. Agrega que no es contribuyente del mencionado impuesto en esa provincia por no realizar ninguna actividad gravada por su hecho imponible de en esa jurisdicción.

Aduce que la Provincia de La Pampa no puede válidamente establecer unilateralmente un impuesto provincial sobre el patrimonio o los ingresos conformados por bienes y tenencias exteriorizados al amparo del título I del libro II de la ley 27.260, ni disponer que son contribuyentes o responsables obligados al pago de dicho gravamen provincial los sujetos comprendidos por el art. 36 de esa ley, ya que ello vulnera lo dispuesto por el art. art. 75, incs. 1° y 2°, de la Constitución Nacional y los arts. 2° y 9°, inc. b), de la ley 23.548.

Procuración General de la Nación

Finalmente, solicita el dictado de una medida cautelar -con habilitación de días y horas inhábiles, de ser menester- que autorice: (i) el otorgamiento de las escrituras públicas de aceptación de compra, adquisición y traslación del dominio del inmueble detalladas en las cláusulas quinta y tercera del boleto de compraventa acompañado con la demanda; y (ii) la inscripción de tales escrituras ante el Registro Inmueble de la Provincia de La Pampa -o dependencia de la misma jurisdicción que cumpla tal función registral- sin previo cumplimiento del pago del impuesto especial establecido por el título segundo de la ley 2.936 de la Provincia de La Pampa (arts. 10 a 15), ordenando a los escribanos públicos intervinientes en el otorgamiento de tales escrituras públicas y a la autoridad registral respectiva que se abstengan de requerir dicho pago previo como condición para otorgar dichas escrituras o proceder a su registración, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la presente causa.

A fs. 105, V.E. corre vista, por la competencia, a este Ministerio Público.

-II-

Las cuestiones esgrimidas en el *sub lite* son sustancialmente análogas a las que tuve oportunidad de examinar en mi dictamen en la causa: CSJ 2718/2017, "Wertheim, Andrea y otros c/ La Pampa, Provincia de s/ acción declarativa de certeza e inconstitucionalidad", del día 26 de marzo de 2018, a cuyos términos y conclusiones estimo que corresponde remitir, en razón de brevedad.

Asimismo, considero conveniente señalar que, aunque la actora plantea la inconstitucionalidad de normas locales por considerarlas contrarias también a la ley 23.548, no resulta

aplicable al caso lo resuelto por V.E. en Fallos: 332:1007, puesto que lo que determina la radicación del *sub lite* en la instancia prevista en el artículo 117 de la Constitución Nacional no es la ilegitimidad del gravamen provincial planteada a la luz de las disposiciones del régimen de coparticipación federal de impuestos, sino la cuestión constitucional atinente a la alegada interferencia que la pretensión tributaria provincial produciría al ejercicio de facultades propias que la Nación puso en práctica por medio del régimen de sinceramiento fiscal establecido en el libro II de la ley federal 27.260 (doctrina de Fallos: 332:1624, entre muchos otros).

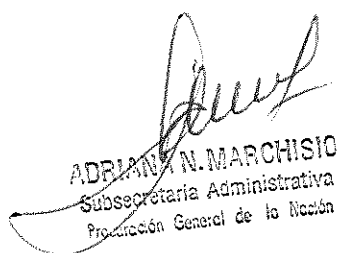
En tales condiciones, estimo que la presente causa se encuentra entre las especialmente regidas por la Constitución, a las que alude el art. 2, inc. 1°, de la ley 48, ya que versa sobre la preservación de las órbitas de competencia entre las jurisdicciones locales y el Gobierno Federal, y ello torna competente a la justicia nacional para entender en ella (conf. Fallos: 327:3883; 329:3459; 4394 y 4667, entre otros).

Por lo anterior, opino que al ser parte una provincia en un pleito de manifiesto contenido federal, cualquiera sea la vecindad o nacionalidad de la actora (Fallos: 317:473; 318:30 y 323:1716, entre otros), el proceso corresponde a la competencia originaria del Tribunal.

Buenos Aires, 5 de julio de 2018.

ES COPIA

LAURA M. MONTI


ADRIAN N. MARCHISIO
Subsecretaría Administrativa
Producción General de la Nación